En nombre de la innovación

La industria controla miles de millones en fondos de investigación de la UE, relega el interés público

RESUMEN EJECUTIVO

Este es el resumen de los hallazgos y las conclusiones de dos amplios informes de investigación escritos por las ONG Global Health Advocates y Corporate Europe Observatory, sobre la cooperación público-privada en materia de investigación en la UE:

- * "Más privado que público: las formas en que la industria farmacéutica domina la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores"
- "Investigación y destrucción: las fábricas de la bioeconomía industrial amenazan el clima y la biodiversidad"

Abordan dos asociaciones de cooperación público-privada entre la Dirección General (DG) de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y los grupos de presión: la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores (IMI en sus siglas en inglés) y la Empresa Común de Industrias de Base Biológica (BBI en sus siglas en inglés). Juntas ilustran una creación institucional para las asociaciones entre el sector público y el privado, consagrando "privilegios y ventajas" para el sector privado y "deberes y obligaciones" para el sector público, con consecuencias preocupantes para la marginación del interés público en una amplia gama de temas: desde descuidar la preparación para las epidemias, hasta alimentar la deforestación y el cambio climático.

- En nombre de la innovación en la investigación sanitaria, la industria farmacéutica, representada por la asociación comercial farmacéutica y el grupo de presión EFPIA (Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas), ha conducido un presupuesto público de investigación de la UE de 2.600 millones de euros para el período 2008-2020 a través de la IMI, pero hasta ahora no ha invertido de forma significativa en áreas de investigación en las que se necesita urgentemente financiación pública. Estas áreas incluyen la preparación a largo plazo para epidemias (incluidas las causadas por coronavirus), el VIH/SIDA, y las enfermedades tropicales relacionadas con la pobreza y que están desatendidas. En cambio, la industria farmacéutica utilizó el presupuesto principalmente para financiar proyectos en áreas que eran más rentables desde el punto de vista comercial.
- La BBI es una asociación público-privada entre grupos de presión que representan a las industrias agroindustrial, forestal, biotecnológica, química y de combustibles fósiles, por un lado, y la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, por otro, con el fin de ayudar a construir una "economía sostenible con bajas emisiones de carbono". En esta asociación, establecida en 2014 por un período de diez años, el sector público aportó un presupuesto de 975 millones de euros, mientras que el sector privado aportó principalmente recursos en especie. La industria definió las prioridades generales de investigación y redactó todos los planes de trabajo anuales. El principal objetivo de la BBI es construir 'biorefinerías', y desarrollar nuevas tecnologías,

para procesar cantidades ilimitadas de biomasa extraída de bosques y tierras, amenazando el rol de éstos como sumideros de carbono, la biodiversidad, así como el suministro de alimentos.

Durante más de 15 años los grupos de presión de la industria han logrado convencer a la Comisión Europea de que deje que el sector privado decida cómo se deben utilizar las grandes cantidades de fondos públicos para la investigación a través de asociaciones público-privadas para la investigación y la innovación. La IMI y la BBI están entre las más grandes de estas asociaciones, las Empresas Comunes. Hay siete Empresas Comunes financiadas entre 2014 y 2020, con más de 7.000 millones de euros pagados por los contribuyentes.

La IMI y la BBI han financiado una amplia gama de proyectos para desarrollar productos, tecnologías y procesos principalmente en beneficio de las empresas involucradas, mientras que las consecuencias para la salud pública, las personas y el medio ambiente apenas se tienen en cuenta. Los informes incluyen numerosos ejemplos detallados, como un proceso de fabricación más barato para un medicamento clave para ayudar a las personas que viven con el VIH en África, que hasta ahora parece haber ayudado únicamente a los beneficios de Sanofi; o la multinacional química Clariant, que recibió millones de euros para construir una fábrica para convertir enormes cantidades de "residuos" agrícolas en biocombustible (a pesar de que éstos tienen otros usos importantes en la agricultura y son importantes para nutrir la tierra).

Justo cuando la pandemia del COVID-19 está poniendo de relieve cómo el pensamiento a corto plazo, así como la privatización de los servicios públicos y la investigación, han dañado la resiliencia de nuestras sociedades, corremos el riesgo de perpetuar los mismos problemas: Los Estados miembros de la UE están negociando el presupuesto de la UE para 2021-2027, incluido el de Horizon Europe, el próximo programa marco de investigación e innovación de la UE. Están en juego 100.000 millones de euros. La Comisión Europea y los Estados miembros más ricos, cuyas empresas son las que más se benefician de estas asociaciones público-privadas, están presionando para que la IMI, la BBI y las demás empresas comunes se renueven bajo una forma nueva pero similar, las "Asociaciones Europeas institucionalizadas". Pero la salud pública y la sostenibilidad son cuestiones fundamentales que requieren una política de investigación e innovación que proporcione conocimientos y resultados para todos, no sólo beneficios para unos pocos.

La IMI y la BBI están destinados a impulsar la competitividad de la industria y abordar los desafíos de la sociedad, pero la industria controla sus prioridades

Las dos principales justificaciones oficiales para crear la IMI y la BBI fueron, en primer lugar, mejorar la competitividad de las industrias en cuestión y, en segundo lugar, abordar problemáticas sociales particulares mediante la financiación de proyectos de investigación que, en el caso de la IMI, mejorarían la salud y el acceso de los pacientes a los medicamentos, especialmente en las áreas de "necesidades médicas o sociales no satisfechas"; y en el caso de la BBI, "contribuirían a una economía de bajo carbono más eficiente en el uso de los recursos y más sostenible". La idea era orientar las innovaciones tecnológicas de la industria de manera que se pusieran al servicio de a las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, nuestras conclusiones muestran que, en lo que respecta a la BBI y la IMI, apenas se están abordando de manera creíble los desafíos de la sociedad, y las pruebas de los avances en materia de competitividad más allá del nivel de la empresa son limitadas. En la abrumadora mayoría de los proyectos examinados, la propia estructura y mecanismos de estas asociaciones público-privadas muestran que las empresas participantes están controlando las prioridades de estas asociaciones, así como el uso del dinero público de la UE para su propio beneficio. Y esto no es sólo el resultado de los abusos de estas empresas en el marco de la asociación, sino también una consecuencia lógica de la forma en que se establecieron estas asociaciones.

Las asociaciones entre los sectores público y privado (PPPs en sus siglas en inglés) suelen ser objeto de controversia, pero su arreglo más frecuente es que el sector público define la misión, contrata al sector privado para llevarla a cabo y acaba siendo el propietario final del producto. Pero en este caso, aunque la BBI y la IMI fueron creadas por reglamentos de la UE, el programa de investigación estratégica de cada PPP - e incluso los planes de trabajo anuales - son propuestos por las empresas participantes, que también terminan siendo las propietarias de los productos finales.

Las mismas empresas - en consorcios con universidades públicas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) - solicitan a la UE propuestas de investigación que en gran parte han redactado ellas mismas, lo cual las coloca en la posición privilegiada de obtener a veces directamente la financiación pública que se les ofrece o, más a menudo, de conseguir que las PYMES y los investigadores públicos trabajen en sus prioridades predilectas, apropiándose del resultado después.

El grupo de presión que representa a la industria en BBI, el Consorcio de Industrias de Base Biológica (BIC en sus siglas en inglés), lo explicó: "Dado que los miembros del BIC elaboran el Plan de Trabajo Anual, tienen acceso a la información desde antes de la publicación oficial de la convocatoria de propuestas. Esto aumenta sus posibilidades de redactar propuestas de proyectos exitosas. El 64% de las grandes empresas, PYMES y agrupaciones de PYMES de los BIC están representadas en proyectos concedidos por el BBI (2014-2017)".

El lobby de la industria farmacéutica admitió en 2011 que la IMI podría ser utilizada para financiar proyectos que la industria farmacéutica habría encargado de todos modos.

Se supone que la industria también debe contribuir a la asociación; en gran parte en especie, pero también en efectivo. Pero en lo que respecta a la BBI, los socios de la industria sólo han pagado hasta ahora el 3% de sus contribuciones financieras previstas y el 3,7% de sus contribuciones en especie auditables. Mientras tanto, la Comisión Europea ya ha pagado el 27 por ciento (264,6 millones de euros) de su contribución en efectivo a la asociación. Además, en ambas asociaciones, los socios de la industria se han opuesto a la transparencia en cuanto a la forma de valorar sus contribuciones en especie (que consisten principalmente en sus propias instalaciones de investigación y personal).

¿Por qué no subcontratar los gastos de investigación y desarrollo privado al contribuyente?

Las prioridades corporativas dominan: La IMI y la BBI financiaron proyectos que ayudaron a la industria a hacer lobby; pero la industria bloqueó la financiación de investigación para la preparación ante epidemias

También documentamos cómo varios proyectos de "investigación" financiados por estas asociaciones están ayudando al lobbying corporativo y a las relaciones públicas mediante la elaboración de propuestas reguladoras favorables a la industria dirigidas a los reguladores de la UE; o financiando actividades de relaciones públicas para mejorar la reputación de los productos entre el público. Por ejemplo, encontramos proyectos del IMI que ayudaron a la industria a presionar a los reguladores sobre la evaluación de la seguridad de los nuevos productos farmacéuticos, como la reducción de los estándares de evidencia para los nuevos medicamentos a través de la aceleración de las aprobaciones de mercado. Algunos proyectos de la IMI ayudaron a la industria a ejercer presión sobre los responsables de la toma de decisiones de la UE en relación a la reglamentación de los OGM o el reciclado de bioplásticos, y produjeron breves vídeos en la web para promover los productos biológicos al público sin mencionar sus posibles riesgos (seguridad, impacto ambiental negativo, etc.).

Este formato de "asociación" ofrece ventajas adicionales a las empresas privadas: cuando sus lobbistas interactúan con funcionarios de alto nivel de la Comisión en las reuniones periódicas de las Juntas de Gobierno de las PPP, **reciben información interna muy detallada e información** sobre lo que ocurre dentro de la Comisión, incluso sobre el futuro de estas asociaciones.

Nos indignó encontrar pruebas de que el grupo de presión de la industria farmacéutica EFPIA no sólo no consideró la financiación de la biopreparación (es decir, estar preparado para epidemias como la causada por el nuevo coronavirus, COVID-19) como un "tema regulatorio" para la IMI (lo que significa que la IMI podría haber buscado proyectos de investigación para financiarlos¹), sino que se opuso a que se incluyera en el trabajo de la IMI cuando la Comisión Europea planteó la posibilidad en 2018. Desde que surgió el coronavirus SARS -un primo cercano del nuevo coronavirus- en 2003, investigadores han instado a acelerar el desarrollo de tecnologías médicas para hacer frente a virus de este tipo. De hecho, había "un candidato prometedor para tratar el coronavirus ya en 2016", pero no le resultó llamativo a la industria farmacéutica con vistas a un mayor desarrollo². Es sólo ahora, con una pandemia mundial en marcha y con la movilización de fondos públicos de emergencia para hacerle frente, cuando la industria está mostrando su voluntad de ayudar a desarrollar vacunas y tratamientos. De manera similar, la industria se entretuvo en el Ebola y sólo cuando se convirtió en una epidemia en 2014 la IMI comenzó a financiar proyectos de investigación relevantes. Ese caso muestra cómo las intervenciones tardías, una vez que la epidemia ya está en marcha, son mucho menos útiles que el tipo de biopreparación que la industria rechazó.

Es hora de poner fin a la captura corporativa de la política y los fondos de investigación de la UE

La financiación pública de investigación es una inversión valiosa y estratégica para la producción de conocimientos para el futuro, y en un momento de crisis superpuestas -desde COVID-19 hasta el cambio climático- esto es más importante que nunca. Pero, ¿está el interés público mejor servido por la actual forma de hacer "asociaciones de investigación" con el sector privado? La evidencia descrita en estos dos informes indican que no.

Lo que está en juego es la captura corporativa de la elaboración de políticas y presupuestos de la UE en áreas clave. La UE ha propuesto algunas reformas modestas a las PPP a la hora de abordar la (enorme) brecha de responsabilidad en lo que se refiere a la financiación en especie, o para mejorar la capacidad de la Comisión para acceder a los documentos de los proyectos (increíblemente, hasta ahora no podía). Pero estas reformas no abordan el problema de fondo: una justificación política errónea que se basa en la premisa de que una asociación público-privada cuyo programa de investigación está definido por intereses comerciales, y cuyo principal objetivo es "reducir el riesgo" de la financiación privada en la innovación tecnológica, puede abordar simultáneamente las necesidades sociales de manera significativa.

La idea mágica de que los objetivos comerciales y públicos se alinean de forma natural sólo sirve para proporcionar una justificación conveniente para los intereses a los que sirve la actual política de investigación e innovación de la UE. Todo ello en detrimento de una política de investigación realmente al servicio del interés público, y de la libertad de los investigadores públicos para definir y evaluar su trabajo. Está claro, por ejemplo, que sin investigadores climáticos públicos e independientes seguiríamos debatiendo la realidad

Ver la descripción de la IMI de los "temas" de la asociación https://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics

² Diarmaid McDonald, 'Trump's attempt to buy a coronavirus vaccine shows why big pharma needs to change', The *Guardian*, *16* de marzo de 2020, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/16/trump-coronavirus-vaccine-big-pharma-president-drugs-industry-profit

del cambio climático provocado por el hombre. Ya es hora de que la política de investigación de la Unión Europea reciba la atención política y los debates que realmente merece.

HALLAZGOS DETALLADOS

=> Sobre la Iniciativa de Medicamentos Innovadores (IMI)

- La IMI es una asociación público-privada entre la Comisión Europea y la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA en sus siglas en inglés), la asociación comercial de la UE y el grupo de presión de la industria farmacéutica.
- **Cronología**: La primera asociación del IMI tuvo lugar entre 2008 y 2013 y se renovó como IMI2 para su desarrollo entre 2014 y 2020 (algunos proyectos continúan hasta al menos 2024, pero las convocatorias de propuestas se lanzarán a más tardar a finales de 2020). Es más que probable que el próximo programa marco de investigación de la UE (Horizon Europe) 2021-2027 incluya un sucesor de la IMI, "Iniciativa de Salud Innovadora".
- **Presupuesto**: El IMI1 comprendía 2.000 millones de euros (1.000 millones de euros de financiación pública de la UE y 1.000 millones de euros de las empresas de la EFPIA); el IMI2 comprendía 3.276 millones de euros (1.638 millones de euros de financiación de la UE, mientras que la EFPIA se ha comprometido a contribuir 1.425 millones de euros en especie).
- **Objetivo declarado**: Mejorar la salud acelerando el desarrollo de medicamentos innovadores y el acceso de los pacientes a éstos, en particular en áreas donde hay una necesidad médica o social insatisfecha.

Desviar fondos públicos para intereses comerciales

- La IMI no está invirtiendo en áreas en las que se necesita urgentemente financiación pública, como la preparación a largo plazo para las epidemias, el VIH/SIDA, las enfermedades tropicales relacionadas con la pobreza y las enfermedades tropicales desatendidas; pero sí está invirtiendo fuertemente en áreas altamente beneficiosas económicamente en las que la industria farmacéutica ya está poniendo recursos considerables.
- La IMI invierte en prioridades que permiten a la industria influir en normas de seguridad importantes para la salud de las personas y ambiental. **Muchos proyectos parecen permitir a la industria utilizar la IMI para presionar a los reguladores sobre cuestiones cruciales** referentes a las normas de seguridad de nuevos medicamentos, con poco involucramiento de actores públicos como la Comisión Europea o los Estados miembros.
- El IMI no está contribuyendo a hacer los medicamentos más accesibles, sino que está afianzando un sistema en el que los precios de los medicamentos se disparan y, por lo tanto asfixian los presupuestos nacionales de salud. En un claro ejemplo, la IMI afirmó contribuir a hacer más asequible en África un medicamento para el VIH que salva vidas, financiando el desarrollo de un proceso de fabricación más barato. Sin embargo, nuestra investigación revela que este proceso no se ha utilizado todavía para fabricar el fármaco en cuestión; por otra parte, también podría utilizarse para reducir los costos de la fabricación de fármacos más rentables para países de altos ingresos (véase el estudio de caso de la flucitosina).
- Incluso en los casos en que la IMI está invirtiendo en áreas de interés para la salud pública, como en la lucha contra la resistencia a los antibióticos, encontramos socios públicos que dieron la voz de alarma sobre el dominio de la industria y las correspondientes preocupaciones sobre la transparencia, la ética y los conflictos de intereses, y que se sintieron obligados a retirarse de los proyectos debido a esto. Tal vez lo más preocupante es que cuando surgieron tales conflictos, parece que ni la Comisión ni la oficina del IMI han sido equipadas o motivadas para intervenir.

- Al mismo tiempo, no hemos visto ninguna **prueba de aventajamiento o de mejora de la competitividad**; más bien, las PYMES han huido del programa debido al comportamiento explotador de las grandes empresas farmacéuticas.

Estas conclusiones indican que la IMI no ha logrado cumplir los objetivos que la justificaban; entre ellos, superar las deficiencias del mercado y mejorar el desarrollo y la disponibilidad de tecnologías sanitarias para las necesidades médicas no satisfechas.

- La influencia de la industria prevalece en los mecanismos de gobernanza de la IMI, lo que ayuda a explicar por qué invierte en las prioridades de la industria por encima de las necesidades sociales insatisfechas. Si bien el Consejo de Administración está ostensiblemente dividido al 50% entre los funcionarios públicos y el sector privado, la Comisión adopta un enfoque de no intervención en la elaboración del programa. Los grupos que son responsables de la redacción de la agenda de la IMI se inclinan de forma escandalosa hacia la industria, a veces hasta un factor de 20-1.
- Los grupos asesores de la IMI, como el Comité Científico, que podrían querer hacer aportaciones sobre temas de salud pública más allá de los intereses de los socios comerciales, no tienen una influencia formal en el programa. De hecho, algunos miembros del Comité Científico han comentado que si un tema no es de interés para la industria, no será financiado. Los grupos de la sociedad civil, como las ONG de salud pública, están ausentes de todos los mecanismos de definición de programas. Y aunque las organizaciones de pacientes están presentes, siguen existiendo interrogantes sobre los conflictos de intereses derivados de su continua dependencia de la financiación de la industria.
- A pesar de las recientes reformas, **la transparencia sigue siendo un problema grave.** La IMI funcionó durante más de diez años sin indicadores concretos para medir su impacto. Además, sigue sin haber un método estándar para informar o calcular la financiación "en especie" de la industria es decir, el tiempo del personal, las instalaciones, etc. que las empresas de la EFPIA pueden reclamar como una parte significativa de su contribución a la IMI. Por otro lado, nuestra investigación revela que la falta de una supervisión adecuada de esta financiación tiene costes reales, con retrasos y lagunas en la financiación que ponen en peligro los proyectos.

En general, emerge un panorama preocupante con un sistema institucional que crea "deberes y obligaciones" para el sector público y sólo "privilegios y ventajas" para el sector privado. Una asociación sólo de nombre, impulsada por intereses privados, con pocos controles reales sobre la elección de prioridades, y pocos mecanismos para garantizar que el público reciba un rendimiento real de su inversión.

- En definitiva, este análisis de la IMI plantea preguntas muy claras sobre por qué exactamente la Comisión Europea está financiando esta iniciativa con el dinero de los contribuyentes de la UE. Controversias como el escándalo del glifosato nos han enseñado que hay que tener mucha precaución cuando la industria entra en contacto directo con los reguladores; sin embargo, la IMI nos lleva exactamente en la dirección opuesta.
- En previas ocasiones, a través de múltiples evaluaciones, se ha dado la voz alarma sobre una estructura de gobernanza y unos procesos de definición de la agenda de la IMI dominados por la industria. Sin embargo, en lugar de abordar estas cuestiones fundamentales, la Comisión no ha logrado que la asociación rinda cuentas, sino que se ha centrado en desviar las críticas haciendo uso de relaciones públicas.
- Actualmente se está preparando la futura la asociación de la UE entre el sector público y el privado en materia de salud. Si bien la UE ha propuesto algunas reformas modestas frente a las múltiples críticas, las actas del Consejo de Administración de la IMI muestran que la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) está utilizando su posición privilegiada para ejercer presión a favor de sus propios intereses; por ejemplo, contra los planes de la UE de reformar la financiación en especie y las normas de propiedad intelectual en el sucesor de la IMI. También se está haciendo lo mismo en el frente de la gobernanza, con la EFPIA en posición privilegiada para elegir con quién quiere trabajar en la próxima asociación y establecer el programa de investigación.
- La próxima asociación incorporará aún más industrias, y también se centrará, por ejemplo, en Big Data en la salud. ¿Debería realmente darse a las empresas farmacéuticas y de tecnología fondos de investigación de la UE para que se sienten juntas y escriban las normas sobre cómo pueden utilizar y beneficiarse de los datos de pacientes y médicos?

=> Sobre la Empresa Común de Industrias de Base Biológica (BBI)

- La BBI es una asociación público-privada entre la Comisión Europea y el Consorcio de Industrias de Base Biológica (BIC en sus siglas en inglés), un grupo de presión ad hoc que reúne a empresas de los sectores de la agroindustria, la silvicultura, la biotecnología, los productos químicos y la energía.
- **Cronología**: Creado en 2014 y en funcionamiento hasta 2024 (los últimos proyectos a financiar se identificaron en 2020). El lanzamiento del sucesor de la BBI, "Circular Bio-based Europe", está siendo evaluado por la Comisión Europea.
- **Presupuesto**: 3.700 millones de euros, de los cuales 975 millones de euros proceden de la financiación pública de la UE y 2.700 millones de euros están destinados a ser aportados por los socios de la industria tanto en especie como en efectivo.
- **Objetivo declarado**: Contribuir a una economía de bajo carbono más eficiente en el uso de los recursos y más sostenible, y aumentar el crecimiento económico y el empleo, en particular en las zonas rurales.

Implementar una estrategia de "Bioeconomía" industrial

- La Empresa Común de Industrias Biológicas (BBI) se creó en 2014 tras una larga campaña de presión por parte de los lobbies, en particular de las industrias biotecnológica, forestal y química. Este paquete de creación de mercados y apoyo es otorgado por la Comisión Europea a estas industrias para implementar la estrategia de "bioeconomía" de la UE. El BBI había de recibir 975 millones de euros del presupuesto de la UE, lo que representa el 21,8 por ciento de todo el dinero gastado por la UE en el segundo "Desafío Social" identificado por el Programa Marco de Investigación de la UE 2014-2020, Horizonte 2020: "Seguridad alimentaria, agricultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y de aguas interiores, y la bioeconomía".
- La idea general tras el concepto de bioeconomía industrial es sustituir parcialmente los combustibles fósiles por "biomasa" (materia biológica, principalmente el producto de la agricultura y la silvicultura) en los procesos industriales, bajo la premisa de que "biológico" es igual a "circular", que a su vez es igual a "sostenible". Sin embargo, esto no es necesariamente así. De hecho, la producción de biomasa en Europa se ha estancado en los últimos 15 años, y la mayor parte de la producción actual sólo se logra mediante prácticas agrícolas y forestales no sostenibles. La demanda adicional desencadenada por esta "bioeconomía" industrial sólo puede satisfacerse a expensas de la producción de alimentos y de la integridad de los restantes ecosistemas en funcionamiento en Europa y en el extranjero. A pesar de la insistencia de la BBI en que sus proyectos no compiten con la producción de alimentos, el 24% de los proyectos que financió se basan en la biomasa agrícola, un 60% más de lo que se había previsto originalmente.

Eliminando los sumideros de carbono existentes en Europa y en el extranjero, mientras que se emite aún más co2

- BBI ignora las consecuencias destructivas de sus proyectos en los sumideros de carbono terrestre, suelos y bosques de Europa. Aumentar la extracción de biomasa sin imponer reducciones en el uso de combustibles fósiles combina lo peor de ambos mundos: eliminar los sumideros de carbono existentes y al mismo tiempo emitir aún más co2. Sólo el 10 por ciento de todos los coordinadores de proyectos financiados por la BBI predijo que sus iniciativas tendrían un impacto positivo en la biodiversidad, y sólo el 27 por ciento anticipó tener un impacto positivo en la gestión sostenible de los recursos naturales.
- Los países de la UE-15 recibieron la mayor parte de la financiación total de la iniciativa BBI, ya que el 87,8% de los participantes procedían de esos países, frente al 8,8% de la UE-13.
- La creación de una industria europea que se alimenta de biomasa sin un suministro doméstico suficiente conlleva un riesgo considerablemente mayor de apropiación de recursos en otros lugares, en particular en el Sur Global, donde se encuentra la mayor parte de la biomasa del planeta. ¿Debería el camino hacia la sostenibilidad europea estar realmente relacionado con las importaciones neocoloniales de madera, petróleo y azúcar de los trópicos de nuevo a expensas del clima, la biodiversidad y los medios de vida de las personas que viven allí?

- La BBI ha dedicado más del 70% de su presupuesto hasta la fecha a financiar proyectos industriales precomerciales y a escala comercial para la producción de diversos artículos basados en la biomasa, como plásticos y combustibles. Esto es cuestionable: ¿deberían las fábricas de escala precomercial y comercial ser realmente elegibles para recibir fondos de investigación de la UE, destinados a financiar investigaciones demasiado arriesgadas para el sector privado, cuando estos proyectos ya han sido probados a escala de demostración, cuando los riesgos relacionados con la tecnología son mínimos y cuando las cantidades involucradas son tan significativas? La BBI también apoya proyectos que incluyen trabajos de reglamentación, lobby y relaciones públicas para influir en los reguladores de la UE y en la percepción pública a favor de las prioridades y los productos de las industrias biológicas. ¿Por qué debería apoyarse todo esto con fondos públicos de investigación?
- Debido a la falta de transparencia, los resultados de los proyectos de investigación financiados por la BBI son difíciles de evaluar. Las empresas privatizan sistemáticamente los resultados y los datos relativos a sus proyectos, y los indicadores de evaluación utilizados son tan estrechos que, al menos inicialmente, no tuvieron en cuenta los impactos sociales y ambientales.

Mientras que la UE aporta el dinero, los socios de la industria apenas aportan su parte.

- Si bien se suponía que todos los proyectos de BBI debían ser financiados tanto con dinero público como con apoyo financiero y en especie de la industria, las últimas cifras disponibles muestran que las empresas participantes sólo habían pagado una pequeña cantidad de lo que habían prometido. Así, la Comisión Europea ya ha pagado el 27% (264,6 millones de euros) de sus contribuciones prometidas en efectivo, mientras que los socios de la industria sólo han pagado hasta ahora el 3% de las suyas, junto con sólo el 3,7% de sus contribuciones en especie auditables. Estas empresas también se oponen a revelar los datos que permitirían una evaluación adecuada de estas contribuciones en especie.

Un modelo defectuoso que probablemente se renovará en Horizon Europe (programa de financiación de la investigación UE 2021-2027)

- La Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea es muy consciente de estos fracasos, pero hasta ahora sólo ha reducido ligeramente su financiación global a la BBI, mientras que sigue apoyando la creación de su sucesor.
- Si bien todo esto podría apuntar a casos de abuso del sistema por parte de la industria, también es coherente con la forma en que se estableció la BBI: su programa general de investigación, así como su plan de trabajo anual, han sido elaborados por la industria. Dada esa configuración, era de esperar que las empresas participantes desviaran los recursos de la BBI hacia sus propias prioridades preexistentes, en lugar de hacer frente a los desafíos de la sociedad.
- Los Estados miembros y la Comisión Europea están negociando actualmente el presupuesto de la UE para 2021-2027, en particular Horizon Europe, el próximo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. Mientras tanto, los grupos de presión empresariales interesados en el desarrollo de la bioeconomía industrial -liderados por EuropaBio, el grupo de presión europeo de la industria biotecnológica- están presionando para que el sucesor de la BBI, "Circular Biobased Europe", se amplíe con aún más dinero público. Dado el papel central que los Estados miembros esperan que la estrategia de bioeconomía de la UE desempeñe en el próximo Pacto Verde Europeo, y el apoyo a la 'Circular Bio-based Europe' expresado por la Comisión Europea en su reciente Plan de Acción de Economía Circular, es lamentablemente muy probable que el lobby de la bioeconomía prevalezca.

RECOMENDACIONES

(Las recomendaciones específicas se detallan al final de cada informe)

-> En IMI2 y BBI (hasta su cierre)

- Para BBI:

- Sólo transferir a los socios de la industria los fondos públicos restantes debidos a los proyectos por la BBI una vez que hayan entregado sus contribuciones esperadas en efectivo y en especie auditables (IKOP).
- Introducir el requisito de que todos los proyectos financiados por la BBI publiquen el origen, la naturaleza y los volúmenes de la biomasa que utilizan cuando sea pertinente, y evaluar los impactos sociales y ambientales de los proyectos (incluido el destino de los residuos), en particular teniendo en cuenta sus consecuencias sobre el cambio directo e indirecto del uso de la tierra, los precios de los alimentos, el clima, la biodiversidad y las desigualdades.

- Para el IMI:

- Incorporar salvaguardias pro-públicas y condiciones estrictas al resto de la financiación pública de la UE, como el acceso abierto obligatorio a los resultados de los proyectos, cláusulas de accesibilidad y asequibilidad, formas de gestión de la propiedad intelectual basadas en el interés público y la concesión de licencias para la explotación de productos finales. Esto debe aplicarse en particular a los proyectos en curso financiados por la IMI relacionados directa o indirectamente con las infecciones por coronavirus, como el proyecto de la Iniciativa de Anticipación y Preparación Zoonótica (ZAPI), pero también a los proyectos financiados a través de las convocatorias que la IMI lanzó después de que estallara la pandemia.
- Los acuerdos de subvención y de consorcio deben considerarse de interés público y hacerse públicos.
- La información sobre la cuantificación de las contribuciones "en especie" de la industria, su composición y el valor respectivo para los proyectos, deben ser transparentes y accesibles.

-> Sobre los posibles sucesores de la IMI y la BBI en Horizon Europe

Permitir a los grupos de presión que participan en la IMI y la BBI impulsar el programa de investigación estratégica y los planes de trabajo anuales de estas Empresas Comunes les dio la posibilidad de dirigir tanto la financiación como las prioridades de las PPP en su propio beneficio, no en el del público; y no se abstuvieron de ello.

La industria parece estar de nuevo al volante de los posibles sucesores de la IMI y la BBI en Horizon Europe - probablemente llamados Iniciativa de Salud Innovadora y Circular Bio Based Europe respectivamente -, ya elaborando sus programas estratégicos y presionando a la Comisión sobre sus características (no hay contribuciones obligatorias en efectivo de la industria, la gobernanza de la propiedad intelectual, los socios...). Se trata, una vez más, de un gran paso en la dirección equivocada cuando a la vez se necesitan reformas serias para establecer un programa abierto, transparente e integrador de múltiples partes interesadas. Es digno de preocupación que la Comisión Europea vuelva a dar a la industria el control de miles de millones de euros de financiación pública de la UE.

Si la Comisión Europea se niega a reconsiderar este aspecto esencial y a tomar la iniciativa en la elaboración de los programas de estas asociaciones, así como a solucionar los numerosos problemas de gobernanza, transparencia y responsabilidad de sus predecesores, desaconsejamos encarecidamente su creación.